

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Se suscribe en esta capital, en la Imprenta de A. Otero, San Miguel, 15.
Los originales comprendidos en la condición 23 de la contrata, no se publicarán sin
previo pago, entendiéndose para esto con el contratista.

Que sustanciado el indidente, el Juzgado sostuvo su jurisdicción, alegando: que la jurisdicción ordinaria es la única competente para conocer de las faltas de que trata el libro 3.º del Código penal; que mientras no sea vencido en juicio el poseedor ó mero tenedor de una cosa, hay que ampararle y mantenerle en la posesión de ella, entre otras formas, castigando al que comete abusos ó intrusiones en la cosa poseída, y esta misión era propia y peculiar de los Jueces, con exclusión de otra Autoridad, según los preceptos aplicables de la Constitución y del Código civil; que era un hecho probado en los autos, que el poseedor de la finca en cuestión, con razón ó sin ella, era el D. Lino Gutiérrez, como también que los terrenos de que se trataba, en modo alguno gozaban del carácter jurídico de montes públicos, por prescribir terminantemente la legislación de este ramo que los montes públicos no podrán sembrarse ni laborearse, y los de que se trata constaba en el informe pericial que se hallaban sembrados y á punto de segarse ó ya segados los cereales de la sementera, y por lo tanto, existía la presunción juristántiva, de que dichos terrenos no eran en modo alguno montes de dominio público y si de pro-

piedad privada, y en su consecuencia, el conocimiento de las intrusiones y daños en ellos cometidos no era de la competencia administrativa, sino de la judicial, y que una constante jurisprudencia venía declarando que no debe la Administración suscitar cuestiones de competencia en los juicios de faltas por daños causados por ganados en heredad particular, aun cuando se aleguen servidumbres de carácter público.

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe a los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, a no ser que el castigo del delito o falta haya sido reservado por la ley a los funcionarios de la Administración, ó cuando, en virtud de la misma ley, deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales especiales u ordinarios hayan de pronunciar.

Visto el art. 611 del Código penal, que impone las penas en el mismo determinadas a los dueños de ganados que entran en heredad ó campo ajeno y causaren daño.

Visto el art. 619 del propio Código, que dice: «Los que intencionalmente, por negligencia ó por descuido causasen un daño cualquiera no penado en este libro ni en el anterior, serán castigados con la multa del medio al tanto del daño causado, si fuere estimable, y no siéndolo, con la multa de 5 á 75 pesetas».

Considerando:

1.º Que la presente contienda jurisdiccional se ha suscitado con motivo del juicio de faltas seguido ante el Juzgado municipal del Tiemblo á consecuencia de denuncia formulada por el guarda jurado particular Faustino Varas Morales por supuesto pastoreo abusivo en finca de particular, sembrada, de la pertenencia de D. Lino Gutiérrez.

2.º Que dados los términos concretos de la referida denuncia, única base de la que hay

necesidad de partir para dirimir legalmente el planteado conflicto, es á todas luces manifiesta la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer del asunto, toda vez que los hechos á que la misma se contrae, pudieron caer dentro de la sanción establecida en los artículos del Código penal que quedan citados:

3.º Que el asentar ahora á la afirmación mantenida por la Jefatura del distrito forestal, y en la que en la Autoridad requerente se apoya para hacer aplicación al caso de la legislación penal de montes y reclamar para la Administración el conocimiento del asunto, sobre desnaturalizar los términos de la cuestión propuesta por el denunciante ante los Tribunales, tanto valdría como dirimir acerca de la propiedad ó posesión de hecho ó de derecho de la finca de que se trata, extremo que ni se discute al presente ni sobre el que en ningún caso incumbiría hacer declaración alguna en la decisión del conflicto.

4.º Que el alcance de este género de decisiones se halla limitado por su propia naturaleza y no puede llegar más allá en ningún momento, y ni en beneficio ni en perjuicio de los derechos de las partes interesadas de aquel que la Constitución señala al Poder moderador en la resolución de las contiendas jurisdiccionales suscitadas entre las Autoridades judiciales y administrativas, á quienes luego, una vez discernida la órbita de su jurisdicción respectiva, toca con entera independencia resolver en lo que se refiere al fondo de las cuestiones definitivamente sometidas al fallo ó resolución de las mismas.

5.º Que, esto sentado, no existe, por otra parte, en el presente caso cuestión ninguna previa de carácter administrativo que hayan de resolver las Autoridades de este orden, pues el hecho mismo que se invoca por la Autoridad gubernativa de hallarse la finca donde el pastoreo abusivo se realizó, enclavada dentro de un monte público, no constando que éste se halle ahora en estado de deslinde, será en todo caso punto esencial que la Autoridad judicial habrá de tener presente

para decidir, en su vista, acerca de la procedencia, improcedencia ó falsedad de la denuncia formulada, y acordar aquello á que hubiere lugar en derecho, dentro del orden puramente criminal ordinario, ajeno del civil ó administrativo, donde la cuestión no ha sido por el actor planteada:

6.º Que no se está, por lo tanto, en ninguno de los dos casos de excepción del art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

7.º Que prospere ó no la denuncia, tal como ha sido deducida ante los Jueces del fuero ordinario, como en el juicio de faltas incoado, no habrá de dilucidarse por aquéllos ni la posesión de derecho ni la propiedad sobre la finca cuestionada, sino que para juzgar de la existencia de la falta imputada les bastará partir de la mera posesión de ello que á ellos incumbe amparar, mientras el que la ostente no haya sido vencido en juicio, tanto más cuanto que en el caso actual no parece se trate de roturación arbitraria reciente cuya reivindicación pudiera intentar por sí la Administración activa, es por todo ello evidente que el fallo que en su día recaiga, en nada, por otra parte, ha de prejuzgar tampoco dichos derechos de las partes, los cuales éstas podrán hacer valer, si vieren convenirles, en el oportuno juicio y ante los Tribunales competentes en el modo y forma que las leyes establecen;

Conformándome con lo consultado por la mayoría del Consejo de Estado en pleno,

Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta competencia.

Dado en Palacio á treinta de Mayo de mil novecientos tres.—Alfonso.—El Presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela.

(Gaceta núm. 154.)

MINISTERIO DE ESTADO

REAL DECRETO

De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en disponer que Mi Ministro de Estado presente á las Cortes un proyecto de ley pidiendo autorización para ratificar un Tratado de propiedad

literaria científica y artística celebrado entre España y los Estados Unidos Mejicanos el 26 de Marzo último.

Dado en Palacio á cuatro de Junio de mil novecientos tres.—Alfonso.—El Ministro de Estado, Buenaventura de Abarzuza.

A LAS CORTES

Denunciado por el Gobierno de los Estados Unidos Mejicanos en 8 de Febrero de 1902 el Tratado de propiedad literaria, científica y artística de 10 de Junio de 1895 entre España y la citada República, el Gobierno de S. M. entabló las gestiones conducentes al objeto de sustituir aquel pacto por otro que conservase á los autores españoles en territorio mejicano la debida protección de sus derechos, anticipándose así á las instancias que diferentes entidades, como el «Centro de Propiedad intelectual», de Barcelona, la «Asociación de la librería» y el «Instituto catalán de las artes del libro» dirigieron al Ministerio de Estado no bien tuvieron noticia de la denuncia.

Terminadas satisfactoriamente las negociaciones en 26 de Marzo último con la firma de un nuevo Convenio, mereció éste el aplauso de la «Asociación de escritores y artistas», representación la más genuina de los intereses á que el asunto afecta, y fué sometido á informe del Consejo de Instrucción pública, el cual opinó que, aunque las estipulaciones concertadas son por todo extremo convenientes y hasta más ventajosas que las caducadas, no coinciden enteramente con las normas establecidas para la celebración de Tratados de esa índole por el art. 51 de la vigente ley de Propiedad intelectual. Fundase tal criterio en que la base 3.ª del referido artículo hace condición indispensable de semejante género de acuerdos el compromiso de que «todo autor ó derecho habiente que asegure con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno de los dos Países contratantes, lo tendrá asegurado en el otro sin nuevas formalidades», mientras que, por virtud del artículo 1.º del Convenio firmado ahora, identificada la situación de los españoles en Méjico á la

PROYECTO DE LEY

(Gaceta núm. 165.)

REAL ORDEN

Resultando que D. José Pi-

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Junio de 1903.—E. Dato.—Sr. Director general de Prisiones.

(Gaceta núm. 155.)

REAL ORDEN CIRCULAR

Terminado por las Comisiones liquidadoras el pago de alcances á los comprendidos en el primer grupo, lo participarán á este Ministerio por el conducto debido, con el fin de que los sobrantes que puedan resultar en algún Cuerpo y las nuevas cantidades que se reciban tengan aplicación á otras Comisiones liquidadoras que no hayan reunido las sumas suficientes para satisfacer los alcances de dicho grupo; en la inteligencia de que esta disposición tiene por objeto que no se pague ningún crédito de los comprendidos en cada agrupación sin que estén satisfechos por completo los de las anteriores, á fin de que no resulte ilusoria la preferencia establecida para el cobro de alcances, ni que las cantidades

—Señor. J. J. G. (Gaceta n.º 154.)

Blancos

Blancos 12 de Junio de 1903.—El
Alcalde, Ramón Moure.

Melón

Melón 12 de Junio de 1903.—El
Alcalde, Emilio Vidal.

Modelo de proposición

D. N. N., vecino de....., enterado

del anuncio, presupuesto y condiciones con que han de adjudicarse las obras de estucado y blanqueo en la casa nueva Consistorial; sita en el Campo de la feria de este pueblo, con sujeción á los expresados documentos por la cantidad de..... pesetas. Acompaño el resguardo provisional preventivo como fianza de este compromiso y mi cédula personal.

Fecha y firma del proponente.

Don Tomás Castro Mosquera, en funciones de Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Carballino.

Hago saber: que por esta Alcaldía se dictó con fecha de hoy, la siguiente

«Providencia.—Mediante á que los contribuyentes que figuran en la anterior relación certificada, no han satisfecho en el período voluntario las cuotas de consumos, correspondientes al primer semestre del actual año, se declaran incursos en el primer grado de apremio, consistente en el recargo del 5 por 100 que marca el art. 47 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, con el cual pueden solventar los débitos durante el plazo de tres días en el local de la Recaudación.

Alcaldía de Carballino 10 de Junio de 1903.—Tomás de C. y Mosquera. Jesús G. Espinosa, Secretario.»

Y para insertar en el «Boletín oficial» de la provincia, con el fin de que llegue á conocimiento de los mismos, libro el presente.

Carballino 10 de Junio de 1903.—Tomás de C. y Mosquera.

Peroja

Confeccionado el apéndice que ha de servir de base al repartimiento del año de 1904, se expone al público por término de ocho días, para que los interesados puedan examinarlo y hacer las reclamaciones que crean oportunas, cuyo documento estará expuesto en el local que ocupa la Secretaría del Ayuntamiento.

Peroja 6 de Junio de 1903.—El Alcalde, Camilo Rodríguez.

Barco

Desde esta fecha queda abierta la cobranza del impuesto de cédulas personales del corriente año, á cargo del Auxiliar de la Secretaría don José Fernández Villagomez.

Lo que se hace notorio para conocimiento del público y demás que corresponda.

Barco 15 de Junio de 1903.—El Alcalde, Antolín Paradelo.

Puebla de Trives

No habiendo comparecido al acto de clasificación y declaración de soldados, apesar de citárseles en forma, los mozos del reemplazo del año actual Francisco López Acca, José Alvarez Pérez, Saturnino Fernández Alvarez, Victorino Rodríguez Pérez, José García y José Rodríguez Rodríguez, números 9, 8, 17,

31, 36 y 38 del sorteo respectivamente, fueron declarados prófugos por el Ayuntamiento.

Por tanto, ruego á las autoridades, Guardia civil y demás agentes de la policía judicial, indaguen el paradero de los citados mozos, procediendo en caso de ser habidos á su captura y conducción ante mi autoridad para que puedan ser presentados ante la Comisión Mixta de Reclutamiento de la provincia.

Puebla de Trives 15 de Junio de 1903.—El Alcalde, Germán Gallego,

JUZGADOS

Don Florencio Alonso Lasote, Juez de primera instancia de Orense.

Hace público: que por don Alfonso Rodríguez, Notario, en Armariz de Lofa, como representante de su esposa doña Herminia García, se solicitó apeo y prorrateo del foral denominado «Jacobo Pato», compuesto de la renta anual que grava sobre una casa de alto y bajo con rosío en Sabadelle, (Pereiro de Aguiar), de que son poseedores conocidos Paulino González, Martín Pato, Juan Gómez, Federico Rodríguez, Ramón Vidal y don Manuel Cantón, y cuyo canon percibe la doña Herminia, como dueña del directo dominio. En su virtud, á medio del presente edicto, se cita en forma á los colonos é interesados desconocidos y ausentes, á fin de que dentro de cuarenta días, siguientes á su publicación en el «Boletín oficial» de la provincia, comparezcan por sí ó apoderado á manifestar si están ó no conformes con la práctica de dichos apeo y prorrateo, y con el Perito nombrado por el peticionario, Agrimensor don Manuel Rodríguez Fernández, vecino de esta capital; bajo apercibimiento que de no presentarse se les habrá por conformes con todo ello, sin necesidad de otra citación ni diligencia. La pensión es de ciento doce reales y dos gallinas.

Dado en Orense á veinte de Abril de mil novecientos tres.—Florencio A. Lasote.—D. O. de S. S.ª P. D., Manuel F. López.

Don Secundino Rodríguez Sleiro, Juez de instrucción accidental de Carballino.

Llama y emplaza á José Suárez Surra, natural de San Gregorio de Corredoira, término municipal de Cotovad, partido de Puente Caldelas, provincia de Pontevedra, y vecino de Santiago de Anillo y en la actualidad en ignorado paradero, de las señas y circunstancias que al último se expresarán, para que dentro del término de diez días, contados desde la última inserción de la presente en el «Boletín oficial» de esta provincia y «Gaceta de Madrid», comparezca en este Juzgado á ser indagado en sumario que se le instruye por el delito de aborto; bajo apercibimiento de que en otro caso, será declarado rebelde y le parará el per-

juicio á que hubiere lugar con arreglo á la Ley.

A la vez, ruego á todas las autoridades y demás individuos de la policía judicial, procedan á su busca y captura, poniéndolo en la cárcel de esta villa á disposición de este Juzgado.

Carballino once de Junio de mil novecientos tres.—Secundino Rodríguez Sleiro.—D. O. de S. S.ª, Isaac Espinosa.

Señas del procesado

Edad 35 años, estatura regular, cara larga y flaca, boca regular, barba poca, pelo y cejas negro, usa bigote, color trigueño, ojos negros y abultados.

Viste pantalón y chaleco de paño color castaño, chaqueta de corte negro á rayas bastante usada, calza botas y usa boina á la cabeza.

Cédula de citación

Por la presente y en virtud de providencia dictada en el día de hoy por el señor don Alejandro Alvarez, Juez de instrucción de este partido, en causa que se instruye en este Juzgado por desobediencia y prolongación de funciones, se cita á Daniel Martínez, ex-Concejal del Ayuntamiento de esta villa y cuyo domicilio en la actualidad es desconocido, para que dentro de los diez días siguientes al que esta cédula aparezca inserta en el «Boletín oficial» de esta provincia de Orense, comparezca ante este referido Juzgado, á fin de ser oído en la mentada causa; bajo apercibimiento que de no hacerlo le parará el perjuicio que haya lugar.

Barco catorce de Junio de mil novecientos tres.—P. H. Alvaro Fernández.

Edictos militares

Don Abelardo Amil de Soto, primer Teniente del Regimiento Infantería de Murcia, núm. 37, Juez instructor del expediente que se sigue al soldado de este Regimiento por delito de desertión Victoriano Blanco Martínez.

Por la presente cito, llamo y emplazo á Victoriano Blanco Martínez, hijo de Pedro y de Inocencia, natural de Cualedro, provincia de Orense, de veinte años de edad, su oficio labrador (las demás señas no se consignan por no constar en su filiación), para que en el preciso término de treinta días, á contar desde la publicación de esta requisitoria, comparezca en este Juzgado, sito en el Cuartel de San Sebastián, de esta plaza, á responder á los cargos que le resultan en dicho expediente; bajo apercibimiento que de no efectuarlo será declarado rebelde.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), exhorto y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares y agentes de la policía judicial, para que practiquen activas diligencias en la busca y captura del referido soldado y caso de ser habido lo pongan á mi disposición en dicho cuartel, pues así

lo tengo acordado en diligencia de este día.

Y para que le presente requisito-ria tenga la debida publicación, insertese en la «Gaceta de Madrid» y «Boletines oficiales» de las provincias de Vizcaya y de Orense.

Dado en Vigo á tres de Junio de mil novecientos tres.—Abelardo Amil.

Don Manuel Rodríguez Pérez, Comandante de Caballería, Juez instructor de la causa instruida al cabo y soldados que fueron del Regimiento Caballería Villaviciosa, en Cuba, Natalio Fernández Santos, Ciríaco Díez Gutiérrez y Eugenio Rodríguez Arroyo, por el delito de homicidio.

Por la presente requisitoria hago saber: que siendo de absoluta necesidad conocer el paradero de la familia cuyas señas se insertan á continuación, para la indemnización de los perjuicios seguidos por dicho delito;

En nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), exhorto y requiero á todas las autoridades, tanto civiles como militares y á los agentes de la policía judicial, para que practiquen activas diligencias en su busca, y caso de ser habido, lo notifiquen á este Juzgado de instrucción para asuntos de justicia, conforme lo he acordado en diligencia de esta fecha.

Señas

Doña Trinidad Fernández Hidalgo, natural de Bejucal (Cuba), viuda del interfecto D. Francisco López Rodríguez, natural éste de Galicia: sus hijos D. Francisco, D. Abelardo, D. Felipe, D. Ignacio, doña Eloisa, y D. Elminia López Fernández; todos naturales de dicha isla de Cuba.

Dada en Palencia á siete de Junio de mil novecientos tres.—El Juez instructor, Manuel Rodríguez.

Don Federico Pita Espelosa, primer Teniente del Batallón Disciplinario de Melilla, y Juez instructor nombrado del expediente seguido al soldado Antonio Prada González, por falta de incorporación al cuerpo.

Por la presente cito y emplazo al soldado Antonio Prada González, hijo de Guillermo y de Carmen, de oficio jornalero, de 26 años de edad y natural de El Burgo (Castro Caldelas), provincia de Orense, desertado, y cuyas señas son: pelo negro, cejas al pelo, color bueno, ojos castaños, nariz regular, barba ninguna, frente regular, aire marcial y producción buena; para que en el término de treinta días, á contar desde la publicación de la presente, comparezca en este Juzgado, que tiene su residencia oficial en el cuartel de San Fernando, á responder de los cargos que se le hacen; bajo apercibimiento que de no ejecutarlo, será declarado en rebeldía.

A su vez, encargo y ruego tanto á las autoridades civiles como militares, que dispongan su busca y captura, y caso de ser habido, lo pongan á mi disposición para la pronta administración de justicia.

Dada en Melilla á cinco de Junio de mil novecientos tres.—Federico Pita.